

Mario V. GUZMAN GALARZA

El pueblo reclama justicia y libertad

Cuando los trabajadores y estudiantes iniciaban un movimiento de protesta por la decisión del gobierno de no repatriar los restos del ex presidente Juan José Torres, era recibido en Santa Cruz con todos los honores el secretario de Estado, Henry A. Kissinger, quien halagó a sus anfitriones con el anuncio de que su gobierno apoyaba la demanda boliviana de una salida al mar y la categórica afirmación de que "el problema de los derechos humanos no es esencial para lograr el establecimiento de la paz".

Nadie ignora, empero, que si se produce un trueque territorial, Estados Unidos se beneficiaría con las riquezas que se encuentran en el territorio boliviano de los Lípez, especialmente con los recursos energéticos y minerales, entre estos últimos el uranio, por lo que a nadie extraña que el gobierno norteamericano apoye las negociaciones que a nivel personal realizan Bânzer y Pinochet. Por otra parte, se advierte que lo dicho en Santa Cruz se encuadra intencionalmente dentro de la estrategia global de dominación imperialista en la región, en la que —según lo declararon ayer Nixon y hoy el secretario Simon— el Brasil desempeña un papel importante como delegado del poder imperial para el control político y militar.

En cuanto a que el hijo de una familia judía que conoció en Alemania los rigores del yugo nazi, sostenga que los derechos humanos no son esenciales para el establecimiento de la paz, revela que la alienación puede exhibirse con cinismo, como enajenación absoluta. El gobierno de Bânzer recibió las palabras de Kissinger como recomendaciones preñadas de sabiduría y desató, de inmediato, una violenta represión contra los ciudadanos que reclamaban justicia y libertad, en indignadas manifestaciones de protesta por la negativa del régimen al pedido de repatriación de los restos del general Torres, en cuyo honor se preparaban actos de homenaje póstumo en la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz y en la sede de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. Los estudiantes de Oruro fueron disueltos a bala y dos de ellos murieron, víctimas de las fuerzas represivas que obedecían la orden de mantener la paz a costa de los derechos humanos y de las libertades democráticas.

Pero no se alegó solamente el cumplimiento de órdenes superiores para atacar nuevamente contra los derechos humanos, sino que los voceros de la dictadura reiteraron sus acusaciones contra el extremismo que provoca "el ambiente de subversión que vive el país". Y así, recurriendo a la retórica, justificaron la mo-

vilización de la segunda división del Ejército, cuyo comando se encuentra en Oruro, para enfrentarse a estudiantes desarmados e indefensos. ¿Y no es acaso ésta una conducta extremista? ¿No lo es tampoco el negar el suelo patrio para que en su seno reposen los restos de un ciudadano y ex presidente de la República, asesinado en el exilio?

Al margen de las consideraciones políticas, de las que me he ocupado en artículos anteriores, es necesario señalar que el hecho insólito y sin precedentes, el de que una persona muerta en el destierro, sea rechazada en su patria y tenga que seguir en el exilio, para ser sepultado lejos de su terruño, es vergonzoso y condenable porque está reñido con las más nobles tradiciones del pueblo boliviano. Por esto los trabajadores y los estudiantes han decretado huelgas y han salido a las calles reclamando justicia, a fin de que sean castigados los autores materiales e intelectuales del crimen que segó la vida

de un boliviano castigado con la pena del destierro por causas políticas, de un militar nacionalista que había denunciado las verdaderas malas intenciones de las negociaciones que realizan Bânzer y Pinochet sobre el problema marítimo de Bolivia; y demandando libertad para darle cristiana sepultura en la patria y rendirle tributo de homenaje en la última despedida.

Se ha demostrado con este caso que, aunque la temporalidad de la vida se confirma dolorosamente en la hora de la muerte, ésta puede ser no sólo el final de la existencia, sino también el principio de otra, trascendente en la dimensión del tiempo y en la memoria de la historia. Y así, quienes pensaron que con la eliminación física de Torres desaparecería para siempre el hombre y su nombre, se equivocaron de plano, porque queda ahora el símbolo como presencia del hombre y su nombre en las banderas de lucha del pueblo, en aquellas que el nacionalismo revolucionario enarbola para convocar a la unidad de las fuerzas populares y democráticas para librar nuevas batallas hasta alcanzar la liberación nacional.

Esta unidad se hizo patente ayer en el plano de la solidaridad latinoamericana, cuando, al lado de la viuda y los hijos del general Torres, marcharon los bolivianos exiliados y residentes en México, los latinoamericanos que encontraron refugio contra la opresión y los mexicanos, dignos hermanos en la causa de la libertad. Entre todos ellos, este peroidista sintió renacer la esperanza de que un día no lejano nuestra América será una sola patria grande, la patria común de todos los hombres libres de América. En los funerales, el dolor y el luto dieron paso a esa joven esperanza y al ímpetu para la tarea que nos espera a todos: fortalecer la unidad para asegurar la justicia y la libertad hasta lograr en la victoria final la liberación de América Latina.